

OPERACIÓN ENJAMBRE: LOS BENEFICIOS DE LA COORDINACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fernando Jiménez Sánchez

AE-48-2024

A casi dos meses del inicio del actual gobierno federal, el redireccionamiento del aparato de seguridad federal parece haber dado su primer resultado palpable. Desde la campaña, el equipo de Claudia Sheinbaum apostó a la coordinación e investigación como parte esencial de su estrategia de seguridad, y todo indica que la Operación Enjambre es un ejemplo del trabajo que pueden realizar las instituciones federales y locales contra la criminalidad.

La Operación Enjambre, iniciada por la Fiscalía del Estado de México, gobernado por Morena, a raíz de un evento de alto impacto nacional de defensa ciudadana ante la extorsión en el municipio de Texcaltitlán, que dejó 14 muertos el 8 de diciembre de 2023, es una muestra de los beneficios del trabajo coordinado de investigación entre las instituciones de seguridad y un ejemplo del reto que la nación tiene por delante.

A poco menos de un año de los sucesos, se presentan resultados que, si bien en un buen número de naciones serían rutinarios, en nuestro país, ante la precariedad que vivimos, son para festejarse. La detención de siete servidores públicos en una operación simultánea realizada en seis municipios, que presumiblemente funcionaban como facilitadores o eran parte de las estructuras, es una muy buena noticia.

Pese a ello, el esfuerzo parece mayor ante los resultados, pues para detener a las siete personas fue necesario el despliegue de 1,500 servidores públicos, el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

De hecho, fue necesario tal despliegue para cumplir 14 órdenes de aprehensión en contra de actores locales en municipios pequeños en su mayoría, que no se encuentran en la lista de los 50 prioritarios del gobierno federal y tampoco son alguna de las cunas de las grandes organizaciones criminales transnacionales que se han formado en el país. Además, el operativo no se realizó en un estado con recursos reducidos, población altamente dispersa o condiciones geográficas retadoras.



Si bien, como se mencionó al inicio, esta operación es un logro que hay que agradecer, como cualquier acción gubernamental que se realice en contra de la criminalidad, por más pequeña que sea, también es una muestra del tamaño del reto criminal mexicano y del esfuerzo que se tendrá que hacer en lugares mucho más agrestes que el Estado de México.

El operativo muestra que posiblemente se buscara probar el esquema de cooperación e investigación en un lugar controlado, conocido por los operadores de las instituciones federales, con una gobernadora de la misma filiación política que la presidenta y un fiscal estatal que ha presentado buenos resultados en algunos de los casos que han llegado a los medios nacionales.

Este esquema de coordinación e investigación necesitará ser probado en otras ubicaciones nacionales y contra estructuras y redes mucho más complejas que operan en los tres niveles de gobierno y que representan una seria amenaza a la seguridad nacional. El modelo paso a paso podría ser una solución para afinar el esquema, sin embargo, los retos criminales difícilmente darán tiempo a las instituciones y sus responsables para mejorar la respuesta gubernamental.

Para estas operaciones también parece que se necesitarán recursos extraordinarios que posiblemente el Estado mexicano no ha desarrollado. Si para este operativo se necesitó el trabajo de dos instituciones locales y cinco federales, casi un año de trabajo de investigación y al menos 1,500 personas para detener a siete personas, ¿qué se necesitaría para desarticular a las organizaciones de Sinaloa o de Jalisco?

Por algo se tiene que comenzar, sin embargo, ante la urgencia y los referentes de EE.UU. y Europa,

Recomendación estratégica

El gobierno federal debe comenzar a buscar fiscales estatales aliados en la lucha contra la criminalidad, aquellos que cuenten con grupos de investigación competentes para elaborar buenas carpetas de investigación y que estén dispuestos a enfrentarse a la criminalidad y sus redes. Una vez localizados, será necesario protegerlos y vigilarlos seriamente, para que no sean eliminados por la criminalidad o terminen beneficiando a otros actores criminales. El reto de coordinación e investigación es tan grande como la apuesta del gobierno federal, y por el bien de México, esperamos pronto festejar operaciones de gran impacto contra la criminalidad.



lo que necesita el país desde hace tiempo son operaciones de este tipo, multiinstitucionales y coordinadas a nivel nacional, donde se detengan las operaciones y a parte relevante de esas miles de personas que son parte o que facilitan los negocios criminales, como la operación Python en EE.UU. de 2020 con 600 arrestos en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación o la IRONSIDE de Europol de 2021 con 800 arrestos en contra de una red internacional de tráfico de drogas.

Con el tiempo conoceremos las condiciones en las que se logran desarrollar la coordinación y la investigación, así como los resultados que esta puede dar. Un asunto que se debe aclarar de inmediato es si se piensan escalar estas operaciones pronto y si van a existir en los estados donde no gobierna Morena o donde no existe la afinidad que se ha desarrollado entre los operadores de seguridad de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

En un futuro próximo será necesario que todos los estados cuenten con el apoyo, sin subordinación, como dice la Presidenta, de las instituciones federales. Esto es crucial para que estas instituciones respalden miles de investigaciones que se encuentran en las fiscalías, esperando el momento adecuado para que las fuerzas de seguridad actúen en contra de actores políticos, sociales y económicos relevantes, aquellos que sustentan y facilitan los negocios criminales.

Último momento

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa siendo cuestionado por sus presuntos vínculos con la criminalidad organizada. El apoyo del gobierno federal parece ser incondicional; sin embargo, ¿cómo pensar en operaciones de gran relevancia contra organizaciones transnacionales si actores políticos, señalados por complicidad, continúan en sus puestos dirigiendo las fiscalías y policías con las que se deben coordinar?

Agradezco los valiosos comentarios de **Misael Barrera Suárez** colaborador de CIS-Pensamiento Estratégico, especialista en seguridad e inteligencia y Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.

Síguelo en **@MisaelBarreraS**



Informe
Estratégico



@CIS_Estrategico



Informe
Estratégico

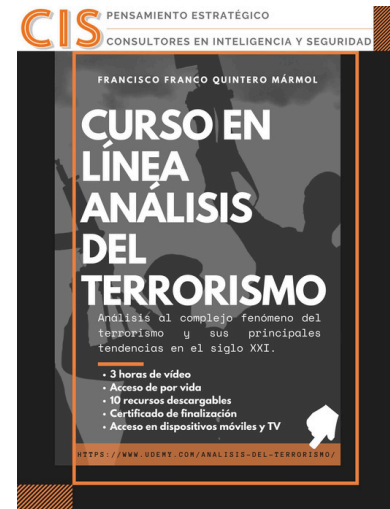


Fernando Jiménez Sánchez

Es colaborador del CIS Pensamiento Estratégico; investigador CONAHCyT-El Colegio de Jalisco; coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana, GTISM, de El Colegio de Jalisco; Consejero Ciudadano del Consejo Ciudadano de Jalisco; miembro del SNII-1 y del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Es comentarista del Podcast Informe Estratégico y Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid, Maestro por la Universidad Rey Juan Carlos y Politólogo por la UNAM.



Síguelo en **@fjimsan**



CIS PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y/O DIFUSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO. AGRADECEMOS RESPETAR LOS CRÉDITOS A LA EMPRESA, LOS AUTORES Y COAUTORES